SEÑORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. -

DAVID EDUARDO RIVAS VINUEZA, en mi calidad de Procurador Judicial de la **Familia Mazoyer¹**, conforme quedó acreditado en el expediente, dentro del proceso **No. 17246-2014-0005**, ante ustedes me dirijo e interpongo para ante la Corte Constitucional, la presente **ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN**, en los siguientes términos:

I. IDENTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN JUDICIAL IMPUGNADA

La decisión judicial que impugno a través de esta acción extraordinaria de protección **es el mandamiento de ejecución de 19 de noviembre de 2020** dictado por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha conformado por los jueces: Mabel del Pilar Tapia Rosero (Ponente), Ignacio Carrasco Cruz y Galo Rumiguano Urbano.

II. CONSTANCIA DE QUE LA DECISIÓN JUDICIAL ESTÁ EJECUTORIADA Y ES DEFINITIVA

La decisión judicial que cuestiono a través de la presente acción extraordinaria de protección, se encuentra ejecutoriada y es definitiva conforme a las reglas dispuestas por la Corte Constitucional en la sentencia No. 117-13-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0619-12-EP. Esto, pues de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, del referido mandamiento de ejecución no cabe recurso alguno.

Por tanto, al no existir la posibilidad de interponer otro recurso, ordinario o extraordinario, que permita cuestionar la decisión referida, la misma se encuentra ejecutoriada por imperio de la ley.

III. DEMOSTRACIÓN DE HABER AGOTADO LOS RECURSOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EFICACES

Conforme lo señalado en el acápite II de esta demanda, al no existir la posibilidad de interponer recurso vertical -ordinario o extraordinario- del mandamiento de ejecución objeto de esta acción extraordinaria de protección, el único medio de impugnación respecto al mismo es la presente acción extraordinaria de protección.

¹ Al hacer alusión a la Familia Mazoyer, nos referimos a los padres de Charlotte Mazoyer: Barnar Mazoyer y Le Quiniou Elizabeth Marie-Aline Jacqueline.

IV. SEÑALAMIENTO DE LA JUDICATURA, SALA O TRIBUNAL DEL QUE EMANAN LAS DECISIONES VIOLATORIAS DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

La decisión violatoria de derechos constitucionales fue dictada por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha conformado por los jueces: Mabel del Pilar Tapia Rosero (Ponente), Ignacio Carrasco Cruz y Galo Rumiguano Urbano.

V. TÉRMINO DE INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN

La presente acción extraordinaria de protección es interpuesta dentro del término correspondiente, pues la decisión judicial que impugno fue dictada el 19 de noviembre de 2020.

En consideración a lo indicado, queda demostrado que he dado cumplimiento al artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 46 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

VI. IDENTIFICACIÓN PRECISA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS EN LA DECISIÓN JUDICIAL

Los derechos constitucionales que se han visto vulnerados a través de las decisiones judiciales que se cuestionan con esta acción, son los siguientes:

VI.1.- El derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el Art. 75 de la Constitución de la República.

VI.2.- El derecho a obtener decisiones motivadas, como una garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, prevista en el Art. 76 numeral 7 literal I) de la Constitución.

VII. INDICACIÓN DEL MOMENTO EN QUE SE ALEGÓ LA VIOLACIÓN ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOCE LA CAUSA

Dada la naturaleza del acto cuestionado, la alegación sobre la vulneración de derechos constitucionales se realiza en esta acción extraordinaria de protección.

Por lo tanto, en la presente acción se demostrará la grave vulneración a los derechos constitucionales de la **Familia Mazoyer** por parte del Tribunal de Garantías Penales en la decisión impugnada.

VIII. BREVES ANTECEDENTES DEL CASO

A. Antecedentes Generales

VIII.1 En diciembre de 2009, un hecho lamentable ocurrido en la ciudad de Quito conmovió a todo el país. Una ciudadana francesa, Charlotte Mazoyer, fue víctima de la delincuencia en el sector de Guápulo, donde un grupo de antisociales le profirieron varios disparos con armas de fuego que la dejaron gravemente herida.

VIII.2 Esta situación se convirtió en una verdadera pesadilla para Charlotte, pues al llegar a la Clínica Pichincha² en busca de auxilio, los personeros de esta centro de salud se negaron a atenderla -como realmente necesitaba- mientras no se entregue una tarjeta de crédito en garantía.

VIII.3 Al momento en el que los amigos de Charlotte -pues su familia estaba en Francia- lograron conseguir una tarjeta de crédito, lamentablemente era muy tarde y los intentos del médico por salvarle la vida -en ese instante- eran ya infructuosos.

VIII.4 Estos hechos, como es de público conocimiento³, dieron lugar al inicio de un proceso penal en contra de los señores Francisco López Vásconez y Carlos López Ayala por el delito tipificado en el artículo 13 de la Ley de Derechos y Amparo al Paciente. Este proceso quedó signado con el **No. 17246-2014-0005**.

VIII.5 El 9 de junio de 2014, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha resolvió declarar la culpabilidad de los señores Francisco López Vásconez y Carlos López Ayala y, además, disponer las siguientes medidas de reparación a la **Familia Mazoyer**:

*“...se determina como monto económico por los daños y perjuicios materiales e inmateriales subjetivos ocasionados por la infracción, la cantidad de (...) (US \$750.000) reparación que será pagada de la siguiente manera: por el sentenciado **Víctor Francisco López Vásconez**, quien por haber emitido políticas directas durante su administración generó que esta infracción se produzca, vulnerando no solo el derecho a la atención de la paciente Mazoyer, sino una afectación a la sociedad al restringir el acceso al servicio médico en emergencias*

² La razón social de dicha clínica es Centro Médico Quirúrgico Pichincha CENMEP S.A.

³ Noticia portal Planv bajo el titular “Caso Mazoyer: una noche fatal, siete años de via crucis” <https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/caso-mazoyer-una-noche-fatal-siete-anos-crucis>; Nota publicada en Diario el Comercio bajo el Titular “Charlotte Mazoyer murió sin cumplir su sueño de navegar por el Amazonas” <https://www.elcomercio.com/actualidad/charlotte-mazoyer-murio-cumplir-sueno.html>.

como una directriz, que de manera personal impuso en el mencionado centro médico, por lo que se le condena al pago de (...) (USD \$742.500), valor que será cancelado en forma solidaria con la compañía CENTRO MÉDICO QUIRURGICO PICHINCHA CENMEP S.A. conforme lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Derechos y Amparo al Paciente; y, al sentenciado Carlos Julio López Ayala, considerando este juzgador la prueba presentada y analizada ut supra se le condena al pago de (...) (US \$ 7.500)..." (el énfasis me pertenece)

VIII.6 Esta sentencia del Tribunal de Garantías Penales fue ratificada por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, así como por la Corte Nacional de Justicia, una vez que se resolvieron los recursos de apelación y casación respectivamente, que fuesen interpuestos por los señores Francisco López Vásquez y Carlos Julio López Ayala.

B. Ejecución de la reparación material e inmaterial

VIII.7 El **1 de septiembre de 2016**, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dictó el mandamiento de ejecución en contra de los sentenciados. El **23 de septiembre de 2016**, el referido órgano jurisdiccional amplió su mandamiento de ejecución y ordenó que éste sea también cumplido por parte de la compañía CENMEP S.A. -Clínica Pichincha-, tal y como se dispuso en la sentencia condenatoria de 9 de junio de 2014.

VIII.8 Desde esta fecha hasta el **9 de febrero de 2018**, el Tribunal de Garantías Penales no realizó acto alguno tendiente a la ejecución del mandamiento referido. Por el contrario, guardó un silencio cómplice pese a los constantes requerimientos formulados por parte de los representantes de la **Familia Mazoyer**.

VIII.9 Es así que, el **9 de febrero de 2018**, después de innumerables insistencias al Tribunal, recién se dispuso a la Secretaria del Tribunal se siente razón de si el señor Francisco López Vásquez había o no cumplido con el mandamiento de ejecución. La Secretaria sentó la razón de no pago después de un mes, es decir, el **9 de marzo de 2018**.

VIII.10 El **2 de julio de 2018**, en lugar de continuar con la fase de ejecución forzosa, el Tribunal de Garantías Penales, inventándose una causal de nulidad no prevista en norma alguna, declaró la nulidad del mandamiento de ejecución de 1 de septiembre de 2016. El "argumento" del Tribunal fue que todo el proceso se encontraba viciado por existir una sentencia ratificatoria de inocencia del procesado Carlos López Ayala, que fue dictada a propósito de un recurso de revisión interpuesto por este procesado.⁴

⁴ Esta sentencia fue dictada el 4 de julio de 2017.

VIII.11 Después de una serie de incidentes procesales, el **27 de junio de 2019**, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dio inicio al proceso de ejecución y, entre otras cosas, de acuerdo al artículo 371 del Código Orgánico General de Procesos⁵, dispuso lo siguiente:

“... De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art. 371 del Código Orgánico General de Procesos, se dispone al actor en el término de 5 días, presente los comprobantes de respaldo de los gastos, conforme la norma prevista...”

VIII.12 El **9 de julio de 2019**, una vez que se adjuntaron los comprobantes de gastos, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ordenó que se proceda con el sorteo de un perito, a fin de que se efectúe la liquidación correspondiente. El sorteo del perito se dio mediante auto de **6 de agosto de 2019**, es decir, prácticamente un mes después.

VIII.13 En esta providencia se designó como perito a la Ing. Lorena Calva Rivera, a quien se le dispuso realizar la liquidación de **capital e intereses** de la indemnización que debía cancelarse a la **Familia Mazoyer**.

VIII.14 Mediante auto de **26 de agosto de 2019**, el Tribunal corrió traslado a los sujetos procesales con el informe realizado por la Ing. Calva Rivera, a fin de que se pronuncien sobre el mismo en el término de 72 horas. Al existir observaciones al informe pericial, el Tribunal ordenó a la perito que proceda a aclarar las dudas suscitadas.

VIII.15 El **27 de septiembre de 2019**, después de innumerables insistencias realizadas al Tribunal, dicho órgano jurisdiccional, con un claro desconocimiento de la normativa procesal, en lugar de dictar el correspondiente mandamiento de ejecución, señaló día y hora para que tenga lugar una audiencia de “sustentación de informe”.

VIII.16 El **13 de noviembre de 2019**, una vez que tuvo lugar esta audiencia de “sustentación de informe”, el Tribunal de Garantías Penales resolvió no aprobar la liquidación practicada por la Ing. Calva Rivera, bajo el argumento de que ésta había hecho un cálculo de costas procesales, cuando únicamente se le solicitó que calcule **interés y capital** de la obligación:

“Quito, miércoles 13 de noviembre del 2019, las 16h37, VISTOS: (...) 4.- De la verificación de la documentación presentada se establece que la perito Lorena Calva Rivera en su informe pericial y en su ratificación al mismo estableció como liquidación el valor determinado en la sentencia de fecha 9 de junio del 2014 a DR. VICTOR FRANCISCO LÓPEZ VASCONES/ CENTRO MÉDICO QUIRURGICO PICHINCHA (PAGO SOLIDARIO) la

⁵ Código Orgánico General de Procesos.- “Art. 371.- Inicio de la ejecución por sentencia ejecutoriada. Admitida la solicitud prevista en el artículo anterior o directamente si se trata de ejecución de sentencia ejecutoriada, la o el juzgador designará una o un perito para la liquidación de capital, intereses y costas en el término concedido para el efecto. Previamente la o el actor tendrá el término de cinco días para presentar los comprobantes de respaldo de gastos conforme con las normas de costas previstas en este Código...”

cantidad de \$742.500, el valor de \$700 de acuerdo a la sentencia como pago por los honorarios a los abogados defensores; y el valor de \$40.000 correspondiente a gastos de honorarios profesionales respaldados con facturas originales, sumando los tres valores dando un total de \$783.420; 5.- **Información presentada que nos permite establecer que la perito incumplió con lo dispuesto por esta autoridad que de manera clara le dispuso realice “la liquidación de capital e intereses”, derivados de la sentencia que se encuentra ejecutoriada, contravino lo establecido en el artículo 22 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial que señala “Toda aclaración o ampliación del informe pericial deberá ser pertinente a la pericia dispuesta y el perito responderá directamente a los requerimientos ordenados por la o el funcionario judicial competente (...)”, contrario sensu la perito realizó una cuantificación de costas que no fue ordenado extralimitándose en su actuación, alterando el valor que se estableció en la sentencia. Por lo que este juzgador considera que de considerarse esta pericia se atentaría contra la seguridad jurídica, que es la garantía de previsibilidad que tenemos todos quienes convivimos en una sociedad de conocer de manera clara y previa las normas jurídicas a las que restringimos nuestro actuar, debiendo en el caso ut supra conforme lo establece el artículo 76 de la Constitución los jueces garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, puesto que existe una sentencia ejecutoriada, **por los argumentos expuestos no se aprueba la liquidación pericial realizada por la perito Lorena Calva Rivera y se dispone nombrar un nuevo perito a fin de que realice “la liquidación de capital e intereses” de la sentencia, para lo cual procédase al sorteo en el Sistema Automático de Trámite Judicial SATJE.- Cúmplase y Notifíquese**” (el énfasis me pertenece)**

VIII.17 El **9 de enero de 2020**, el Tribunal realizó el sorteo del nuevo perito para que practique la liquidación respectiva. En esta ocasión, se designó a la Ing. Alcira Vela Carrera, quien, de igual manera, debía calcular el **capital e intereses** del valor reconocido por reparación material e inmaterial en la sentencia condenatoria.

VIII.18 El **6 de marzo de 2020**, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha corrió traslado a los sujetos procesales con el informe pericial practicado por la Ing. Alcira Vela Carrera, a fin de que lo aprueben u objeten en el término de 48 horas.

VIII.19 El **8 de julio de 2020**, después de varios incidentes procesales, el Tribunal de Garantías Penales declaró caducado el nombramiento del perito y, como consecuencia de aquello, dispuso, **una vez más**, que se designe a otro perito para que realice la liquidación respectiva.

VIII.20 El **2 de septiembre de 2020**, después de prácticamente dos meses, el Tribunal dispuso, que se efectúe el nuevo sorteo del perito para el cálculo de **capital e intereses** a los que tenía -y tiene- derecho la **Familia Mazoyer**. En esta ocasión, se designó a la Ing. Norma Chuga Almeida.

VIII.21 El **23 de septiembre de 2020**, el Tribunal nos notificó con el informe pericial de la Ing. Chuga Almeida para que nos pronunciemos al respecto. Sobre este informe se plantearon algunas observaciones. Una vez que la perito esclareció las observaciones formuladas por las partes, el **7 de octubre de 2020**, el Tribunal corrió traslado a los sujetos procesales con las aclaraciones presentadas por la profesional referida.

VIII.22 El **19 de noviembre de 2020**, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dictó el mandamiento de ejecución **sin la liquidación de intereses respectiva**, pues, a juicio de este órgano jurisdiccional, **era potestativo para el Tribunal hacerlo o no**. Sin citar una sola norma jurídica que respalde esta posición, el Tribunal, después de más de dos años de llevar a cabo un proceso de liquidación de capital e intereses, concluyó que únicamente se deberá cancelar el valor constante en la sentencia condenatoria:

*“VISTOS: Agréguese los escritos presentados por Emiliano Donoso Vinueza de fecha 23 de octubre del 2020; el escrito presentado por Víctor Francisco López Vásquez de fecha 30 de octubre del 2020; y el de fecha 4 de noviembre del 2020; en atención a los mismos se realiza las siguientes consideraciones: PRIMERO: Tómese en cuenta como abogados defensores a los abogados Edgar Ulloa Balladares, , Ricardo Velasco Cuesta, Patricio Quevedo Vergara, Javier Jaramillo Troya y Juan Sebastián del Castillo, en representación del señor Víctor Francisco López Vásquez, quienes se suman a la defensa realizada por sus otros abogados ya designados, y tóme en cuenta los correos electrónicos referidos en su escrito; en relación a los abogados José David Ortiz Custodio y Juan Sebastián del Castillo, que designa como sus defensores del escrito presentado no se verifica la firma de los referidos abogados por lo que no se los puede considerar como debidamente autorizados; SEGUNDO En relación al pedido realizado por el Dr. Pedro Crespo, abogado del señor Víctor Francisco López Vásquez concédase compulsas de la foja 178 conforme lo solicitado, puesto que no se puede conceder copias certificadas del original, puesto que el expediente se encuentra en la Corte Nacional de Justicia por un recurso de revisión interpuesto por su defendido; TERCERO: En relación al escrito presentado por los abogados defensores del señor Víctor Francisco López Vásquez en el que solicitan la nulidad del proceso de ejecución y se prosiga con el trámite verbal sumario, este juzgador les recuerda que con fecha 2 de julio del 2018 este juzgador pluripersonal declaró la nulidad “de todo lo actuado desde el mandamiento de ejecución constante a Fjs 179 y vuelta, retrotrayéndose el proceso hasta antes de la referida resolución”, auto que debidamente motivado, fue recurrido por el Acusador particular ante la Sala Penal de la Corte Provincial y con fecha 1 de marzo del 2019 el referido tribunal resolvió “Inadmitir el recurso de apelación, el mismo que ha sido ilegalmente interpuesto e indebidamente concedido”, por lo que lo referido por el abogado de la defensa de Víctor Francisco López Vásquez, ya fue resuelto anteriormente y se encuentra ejecutoriado por lo que su pedido deviene en improcedente. CUARTO: **De conformidad a lo establecido en el artículo 372 del Código Orgánico General de Procesos el sentenciado Víctor Francisco López Vásquez pague o cumpla con la obligación dispuesta en el término de 5 días, bajo la prevención de no hacerlo se procederá a la ejecución forzosa, del valor establecido en la sentencia de 9 de junio del 2014 como daños y perjuicios materiales e inmateriales subjetivos ocasionados***

por la infracción esto es el valor de setecientos cuarenta y dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US 742.500) al acusador particular señor Bernard Mazoyer o a su representante legal, aclarando que al ser potestativo admitir o no el informe pericial presentado por la Ing. Norma Elizabeth Chuga Almeida, se dispone se considere como valor a pagar únicamente el establecido en la sentencia que se encuentra ejecutoriada.- Cúmplase y Notifíquese” (el subrayado y resaltado me pertenecen)

VIII.23 Esta decisión del Tribunal de Garantías Penales causó y causa un gravamen irreparable a la **Familia Mazoyer**. Esto, no solo por el tiempo transcurrido para lograr ejecutar la reparación material e inmaterial por el grave delito del cual fue víctima su hija, sino porque, además, de forma inexplicable, el Tribunal decidió ignorar el derecho de esta familia a que se liquide el capital e intereses de la indemnización que les correspondía; lo cual, ni siquiera era controvertido por parte del sentenciado Francisco López Vásconez.⁶

IX. FUNDAMENTACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES

De los antecedentes descritos, se desprenden las siguientes violaciones a derechos constitucionales:

IX.1 Vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva:

El derecho a la tutela judicial efectiva está consagrado en el artículo 75 de la Constitución y, conforme la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), está conformado por tres dimensiones: a) el derecho de acceso a la justicia (que incluye la debida diligencia del órgano jurisdiccional); b) el derecho a recibir decisiones motivadas; y, c) el derecho a la ejecución de los fallos.

En el presente caso, **la dimensión de la tutela judicial efectiva que se vulneró es el derecho a la ejecución de los fallos**, pues el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha no garantizó que se ejecute integralmente la sentencia condenatoria de 9 de junio de 2014 dictada dentro del proceso penal No. 17246-2014-0005.⁷

El referido Tribunal durante más de dos años sustanció la fase de ejecución de la sentencia en cuestión y dispuso, en varias ocasiones⁸, que se practique la liquidación de capital e

⁶ Mediante escrito de 29 de septiembre de 2020, el sentenciado López Vásconez, presentó un escrito observando el último peritaje practicado por la Ing. Chuga, donde únicamente se señaló que, supuestamente, existía un exceso de USD 33.431,00 en el informe por un “error” en la tasa de interés. Es decir, reconociendo el derecho a que se liquiden los intereses respectivos.

⁷ Ver párrafo VIII.5 de esta demanda.

⁸ Ver párrafos VIII.16,17,18,19 y 20.

intereses a fin de dictar el mandamiento de ejecución respectivo. Sin embargo, en noviembre de 2020, después de todo el tiempo transcurrido, el Tribunal ordenó que “**se cancele únicamente lo dispuesto en la sentencia**” bajo la consigna de que es “**potestativo**” para el Tribunal considerar o no esta liquidación, conforme consta en el **considerando cuarto del auto de 19 de noviembre de 2020**.

Si bien el Tribunal está en la libertad de aceptar o no el peritaje -por temas de forma o vicios del informe-, aquello no implica que dicho órgano jurisdiccional **pueda decidir si se liquidan o no los intereses**. Esta labor no le corresponde al juzgador de ejecución, pues éste simplemente debe ordenar se liquide aquello y, si no está de acuerdo con el peritaje, designar a otro perito para el efecto.

De allí que, si bien la **Familia Mazoyer** pudo acceder formalmente al sistema de justicia, no obtuvo ni ha obtenido hasta el momento la ejecución integral del fallo condenatorio por el grave delito del cual su hija, Charlotte, fue víctima.⁹ Esta es una de las aristas más importantes del derecho a la tutela judicial efectiva conforme lo ha desarrollado la Corte IDH¹⁰, lo cual se ve agravado, además, por la falta de motivación de la resolución en sí, conforme se demostrará a continuación.

IX.2 Vulneración al derecho al debido proceso en su dimensión a obtener decisiones motivadas:

El derecho que tenemos todas las personas a obtener una decisión judicial motivada es una garantía del debido proceso y una dimensión del derecho a la tutela judicial efectiva conforme lo ha reconocido la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones.¹¹

El derecho al debido proceso en la garantía de motivación está contenido en el numeral 7 del artículo 76, literal I) de la Constitución de la República, que dispone lo siguiente:

⁹ Cfr. Corte Constitucional del Ecuador: sentencia No. 052-13-SEP-CC, caso No. 1078-11-EP, sentencia No. 040-13-SEP-CC, caso No. 0010-12-EP; sentencia No. 006-13-SEP-CC, caso No. 0614-12-EP; sentencia No. 012-13-SEP-CC, caso No. 0253-11-EP; sentencia No. 018-13-SEP-CC, caso No. 0201-10-EP.

¹⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador. Sentencia de fondo y reparaciones. Párr. 106: “106. Asimismo, el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Adicionalmente, las disposiciones que rigen la independencia del orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para asegurar la puntual ejecución de las sentencias sin que exista interferencia por los otros poderes del Estado y garantizar el carácter vinculante y obligatorio de las decisiones de última instancia. La Corte estima que en un ordenamiento basado sobre el principio del Estado de Derecho todas las autoridades públicas, dentro del marco de su competencia, deben atender las decisiones judiciales, así como dar impulso y ejecución a las mismas sin obstaculizar el sentido y alcance de la decisión ni retrasar indebidamente su ejecución.”

¹¹ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 0031-14-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0868-10-EP

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el **derecho al debido proceso** que incluirá las siguientes garantías básicas:

...7. **El derecho de las personas a la defensa** incluirá las siguientes garantías:

l) **Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.** No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos **que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.** Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” (el subrayado y resaltado me pertenecen)

Para que una resolución esté motivada debe necesariamente reunir tres elementos:

- Contener una descripción detallada de los hechos relevantes del caso que han sido debidamente comprobados durante el procedimiento:
- Identificar las normas cuya consecuencia jurídica se va a aplicar para resolver el caso; y,
- Explicar por qué los hechos del caso se subsumen (adecúan) en la hipótesis de la norma cuya consecuencia jurídica se aplica en la parte resolutive respecto a cada una de las alegaciones de los justiciables.

En el presente caso, estos requisitos no se cumplen en la resolución judicial cuestionada conforme se detalla a continuación:

A. Inexistencia de justificación de porqué es potestativo que el Tribunal de ejecución liquide o no los intereses

En el **considerando cuarto de la resolución de 19 de noviembre de 2020**, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha señala que es potestativo para dicho órgano jurisdiccional admitir o no la liquidación de intereses y, por tanto, ordena que se pague únicamente lo dispuesto en la sentencia condenatoria de 9 de julio de 2014, conforme lo siguiente:

“VISTOS: Agréguese los escritos presentados por Emiliano Donoso Vinueza de fecha 23 de octubre del 2020; el escrito presentado por Víctor Francisco López Vásquez de fecha 30 de octubre del 2020; y el de fecha 4 de noviembre del 2020; en atención a los mismos se realiza las siguientes consideraciones: (...) CUARTO: **De conformidad a lo establecido en el artículo 372 del Código Orgánico General de Procesos el sentenciado Víctor Francisco López Vásquez pague o cumpla con la obligación dispuesta en el término de 5 días, bajo la prevención de no hacerlo se procederá a la ejecución forzosa, del valor establecido en la sentencia de 9 de junio del 2014 como daños y perjuicios materiales e inmateriales subjetivos ocasionados por la infracción esto es el valor de setecientos cuarenta y dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US 742.500) al**

*acusador particular señor Bernard Mazoyer o a su representante legal, **acclarando que al ser potestativo admitir o no el informe pericial presentado por la Inq. Norma Elizabeth Chuga Almeida, se dispone se considere como valor a pagar únicamente el establecido en la sentencia que se encuentra ejecutoriada.- Cúmplase y Notifíquese***” (el subrayado y resaltado me pertenecen)

Como se observa, el Tribunal realiza esta afirmación **sin señalar en base a qué norma jurídica** concluye que es potestativo para el juzgador de ejecución decidir si se liquidan o no los intereses. Es decir, cuál es justificativo normativo que el Tribunal utiliza para arribar a esta decisión.¹²

Por tanto, es claro que al no existir una justificación de por qué el Tribunal podía o no liquidar los intereses a su discrecionalidad, es evidente que la resolución objeto de esta acción extraordinaria de protección contiene un vicio de motivación tal cual lo ha advertido la Corte Constitucional.¹³

B. Contradicciones internas en la resolución

Uno de los parámetros para comprobar que una decisión jurisdiccional esté motivada es que esta no tenga contradicciones internas en su razonamiento, tal y como lo ha referido la Corte Constitucional en innumerables ocasiones.¹⁴

¹² Cfr. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 113-13-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0312-13-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 161 de 14 de enero de 2014: *“La necesidad de motivación de las sentencias no solamente radica en el hecho de que ésta se encuentre conforme con la ley, sino que en la motivación se hace presente la dimensión social del proceso y la repercusión que tiene en la sociedad cualquier sentencia judicial, pues, como señala Alfredo Gozaíni: la medida de la legalidad no siempre es la vara de la justicia, como también la discrecionalidad excesiva, irrazonable o directamente incongruente, es una arbitrariedad que el mismo sistema repulsa. **Corresponde al Juez argumentar los contenidos de su pronunciamiento con razones suficientes para que las partes tengan el convencimiento de que la decisión es justa.** (...Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la autoridad que tome la decisión **exponga las razones que el Derecho ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecúan a los deseos de solucionar los conflictos presentados...**”* (el subrayado y resaltado me pertenecen)

¹³ Sentencia No. 048-13-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0169-12-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 77 de 10 de septiembre de 2013; Sentencia No. 343-16-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0620-12-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 852 de 24 de enero de 2017; Sentencia No. 227-14-SEP-CC, dictada en el caso No. 1269-13-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 423 de 23 de enero de 2015; Sentencia No. 241-12-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0384-12-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 289 de 15 de julio de 2014.

¹⁴ Cfr. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 048-13-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0169-12-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 77 de 10 de septiembre de 2013; Sentencia No. 343-16-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0620-12-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 852 de 24 de enero de 2017; Sentencia No. 227-14-SEP-CC, dictada en el caso No. 1269-13-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 423 de 23 de enero de 2015; Sentencia No. 241-12-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0384-12-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 289 de 15 de julio de 2014.

En la resolución de 19 de noviembre de 2020, existe una clara contradicción interna en el razonamiento del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, pues, como sustento de su decisión, invoca una norma jurídica que advierte lo opuesto a lo que concluye el Tribunal.

Lo dicho se verifica con el siguiente extracto del **considerando cuarto** del auto de 19 de noviembre de 2020:

*“CUARTO: **De conformidad a lo establecido en el artículo 372 del Código Orgánico General de Procesos** el sentenciado Víctor Francisco López Vásquez pague o cumpla con la obligación dispuesta en el término de 5 días, bajo la prevención de no hacerlo se procederá a la ejecución forzosa (...), **aclarando que al ser potestativo admitir o no el informe pericial presentado por la Ing. Norma Elizabeth Chuga Almeida, se dispone se considere como valor a pagar únicamente el establecido en la sentencia que se encuentra ejecutoriada.- Cúmplase y Notifíquese**” (el subrayado y resaltado me pertenecen)*

Del texto reproducido, se desprende que el Tribunal, **en la parte inicial del considerando cuarto**, advierte que dictará el mandamiento de ejecución de acuerdo con lo previsto en el artículo 372 del COGEP. Esta norma prevé que: *“Art. 372.- Mandamiento de ejecución. **Recibida la liquidación, la o el juzgador expedirá el mandamiento de ejecución que contendrá...**”* (el énfasis me pertenece)

Como se observa, de conformidad con este precepto normativo, el Juez debe dictar el mandamiento de ejecución **una vez que cuente con la liquidación respectiva**. No obstante, en la **parte final del considerando cuarto** del acto cuestionado, el Tribunal de Garantías Penales dicta el mandamiento de ejecución **sin que exista una liquidación de intereses aprobada y advirtiendo -incluso- que es potestativo aquello**, en oposición a lo que prevé la norma invocada por el propio órgano jurisdiccional.

Por tanto, al existir contradicciones internas en la resolución que resultan incompatibles con la conclusión a la que arriba el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, es claro que el auto de 19 de noviembre de 2020, contiene un vicio de motivación tal cual lo ha advertido la Corte Constitucional.¹⁵

X. PRETENSIÓN CONCRETA RESPECTO DE LA REPARACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

¹⁵ Sentencia No. 048-13-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0169-12-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 77 de 10 de septiembre de 2013; Sentencia No. 343-16-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0620-12-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 852 de 24 de enero de 2017; Sentencia No. 227-14-SEP-CC, dictada en el caso No. 1269-13-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 423 de 23 de enero de 2015; Sentencia No. 241-12-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0384-12-EP, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 289 de 15 de julio de 2014.

En virtud de los antecedentes anotados y fundamentado en lo que establecen los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador, así como de los artículos 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicito se acepte la presente acción extraordinaria de protección, se declare que se han vulnerado los derechos constitucionales de la familia Mazoyer, y que, en consecuencia, se dicten las siguientes medidas de reparación integral:

- Se deje sin efecto el auto dictado el 19 de noviembre de 2020 por parte del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha conformado por los jueces: Mabel del Pilar Tapia Rosero (Ponente), Ignacio Carrasco Cruz y Galo Rumiguano Urbano, en cuanto a que no se ordena el pago de los intereses correspondientes.
- Se designe mediante sorteo, otro Tribunal de Garantías Penales, para que ordene la liquidación de los intereses correspondientes hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago del valor constante en la sentencia condenatoria ejecutoriada y resuelva lo que corresponda, sin violentar mis derechos constitucionales.

XI. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DEL PROBLEMA JURÍDICO Y DE LA PRETENSIÓN

La relevancia constitucional del presente caso, radica en que permitirá que esta Corte Constitucional, a partir de la resolución de esta acción extraordinaria de protección, aborde temas de suma importancia desde el punto de vista constitucional, como, por ejemplo, los siguientes:

- Este caso permitirá que la Corte Constitucional se pronuncie sobre **el núcleo duro del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión a la ejecución de los fallos**, y aclare cuál es el contenido esencial de este derecho, así como qué rol cumplen los órganos jurisdiccionales en el mismo.

Es importante mencionar, que esta Corte Constitucional **no ha tenido la oportunidad de referirse a profundidad sobre este tema**, pues, conforme consta en las sentencias No. 1943-12-EP/19, No. 382-15-EP/20, No. 621-12-EP/20, entre otras más, la Corte únicamente ha mencionado de forma genérica a esta arista de la tutela judicial efectiva, haciendo alusión a que la sentencia debe cumplirse por parte de quien ha sido condenado.

Sin embargo, no ha analizado temas cómo **los obstáculos que se presentan en la ejecución integral de los fallos y las potestades de los jueces de ejecución al momento de dar cumplimiento a la resuelto en sentencia**. Esto es una oportunidad para que la Corte aclare que el núcleo esencial de la tutela judicial

efectiva, en cuanto a la ejecución de los fallos se refiere, implica que la ejecución **debe ser completa, perfecta, integral y sin demora, conforme lo ha advertido la Corte IDH en el caso Mejía Idrovo vs. Ecuador.**¹⁶

- En esta misma línea, este caso constituye una oportunidad para que la Corte Constitucional refuerce su línea jurisprudencial sobre **el plazo razonable para la ejecución de los fallos judiciales conforme fue analizado en las sentencias No. 1584-15-EP/20 y 1825-15-EP/20** pues el tiempo es uno de los factores importantes para que se cumpla con la tutela judicial efectiva.
- Finalmente, esta Corte puede consolidar su línea sobre **la motivación de las resoluciones** y pronunciarse respecto a la importancia que existe que **en la fase de ejecución**, una de las más importantes del proceso, **las decisiones judiciales se encuentren respaldadas en los preceptos normativos previos, públicos y vigentes.**

En relación a este punto, la Corte Constitucional puede reforzar su línea jurisprudencial plasmada en la sentencia No. 188-15-EP/20 y aclarar que en ejecución de una sentencia, debe existir al menos una motivación con premisas implícitas.

XII. GRAVAMEN IRREPARABLE A LOS DERECHOS DE LA ACCIONANTE

De conformidad con el artículo 62 numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, uno de los propósitos de admitir a trámite una acción extraordinaria de protección es que “... **permita solventar una violación grave de derechos**, *establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional.*” (el subrayado y resaltado me pertenecen)

Tal es la relevancia de este requisito, que la Corte Constitucional en la sentencia No. 172-12-EP/19 de 20 de agosto de 2019, ha advertido que la existencia de un **gravamen irreparable**, es un parámetro para que la Magistratura pueda analizar la vulneración de derechos en autos o resoluciones que, *prima facie*, no necesariamente cumplen con el parámetro de cosa juzgada material.

Así, en la referida resolución el Pleno de la Corte Constitucional señaló:

¹⁶ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Mejía Idrovo vs. Ecuador. Sentencia de fondo y reparaciones.

“44. Con respecto al requisito de que el acto impugnado sea una sentencia, un auto definitivo o una resolución con fuerza de sentencia, esta Corte ha considerado que un auto definitivo es aquel que pone fin al proceso del que emana. Un auto que pone fin al proceso es aquel que se pronuncia de manera definitiva sobre la materialidad de las pretensiones, causando cosa juzgada material o sustancial; o aquel que, previo a pronunciarse sobre el fondo de las pretensiones, impide que el proceso continúe y que las pretensiones puedan ser discutidas en otro proceso.

45. También podrían ser objeto de acción extraordinaria de protección, de manera excepcional y cuando la Corte Constitucional, de oficio, lo considere procedente, los autos que, sin cumplir con las características antes señaladas, causan un gravamen irreparable. Un auto que causa un gravamen irreparable es aquel que genera una vulneración de derechos constitucionales que no puede ser reparada a través de otro mecanismo procesal.”¹⁷ (el subrayado y resaltado me pertenecen)

Como se puede observar, uno de los parámetros para que la Corte Constitucional pueda analizar una acción extraordinaria de protección respecto de una decisión que no cumpliría con el estándar de auto definitivo, resolución con fuerza de sentencia o sentencia, es que ésta cause un gravamen irreparable al accionante. Es decir, que **la vulneración a sus derechos constitucionales no pueda ser reparada a través de otro mecanismo procesal**.

En el presente caso, la acción extraordinaria de protección propuesta por la **Familia Mazoyer** precisamente pone esta disyuntiva en consideración de la Corte Constitucional, pues la decisión impugnada, *que formalmente no es un auto definitivo, resolución con fuerza de sentencia o sentencia*, les causa un gravamen irreparable. Esto, en vista que se vulnera su derecho a la **tutela judicial efectiva**, en la dimensión a la **ejecución integral** de la sentencia condenatoria de 9 de julio de 2014, toda vez que el Tribunal de ejecución pretendió **modular el alcance** de la sentencia referida, cuando aquello **está por fuera de su competencia**.

Lo dicho, toda vez que, **después de más de dos años de liquidar intereses y capital de la indemnización conforme correspondía a la etapa procesal**, sin citar respaldo normativo alguno, el Tribunal de Garantías Penales concluyó que es potestativo para dicho órgano jurisdiccional conceder o no la liquidación de intereses, **como si se tratase de un proceso declarativo y no de ejecución**.

El pretender que en fase de ejecución el Tribunal determine a qué tiene o no derecho la parte a quien se le ha otorgado una reparación material e inmaterial -a través de una sentencia firme-, **implicar anular su derecho a la tutela judicial efectiva**, pues lejos de cumplir con la ejecución de la sentencia se pone obstáculos insalvables a aquello.

¹⁷ Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 154-12-EP/19 de 20 de agosto de 2019.

Esta vulneración de derechos **no puede ser remediada por otro mecanismo procesal**, pues **no existen otros medios de impugnación dentro de la justicia ordinaria que permitan cuestionar el mandamiento de ejecución**. Esto implica que, en la práctica, se está denegando justicia a la **Familia Mazoyer**, pues la reparación por los daños causados a propósito del cometimiento de un grave delito en contra de su hija, Charlotte, no va a ejecutarse integralmente.

De allí que, resulta imperante que la Corte Constitucional analice el presente caso y resuelva si en el existe o no vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto a la ejecución de las sentencias, puesto que, en el caso objeto de análisis, **es el único órgano jurisdiccional que puede determinar si la actuación de la justicia ordinaria vulnera o no derechos constitucionales, y evitar que se consume una denegación de justicia**.

XIII. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A continuación realizaremos un breve detalle del cumplimiento de esta acción de los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:

1) Hemos descrito con absoluta claridad, la relación que tienen los derechos que han sido vulnerados, con la decisión jurisdiccional adoptada por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Adicionalmente, hemos independizado nuestra argumentación a los hechos del caso subyacente, por lo cual no estamos pidiendo que esta Corte los analice o se pronuncie sobre ellos.

2) En el acápite anterior, hemos descrito la relevancia constitucional del caso puesto a consideración de la Corte Constitucional. Esta relevancia se relaciona con graves vulneraciones a los derechos constitucionales e inobservancia de varios precedentes de la Corte Constitucional, así como a la posibilidad que tiene la Corte de desarrollar precedentes vinculantes a partir del presente caso.

3) El tercer requisito previsto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías, se supera con la descripción detallada de la vulneración de derechos constitucionales ocasionados por la decisión jurisdiccional adoptada por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha

En la redacción de esta demanda se encuentran argumentos de relevancia constitucional que se apartan de una simple apreciación en cuanto a estar a favor o en contra de la decisión cuestionada.

- 4) En cuanto al cuarto requisito, nuevamente, en esta demanda no se ha alegado en ningún momento la falta o errónea aplicación de la ley.
- 5) Es importante indicar, que no solicitamos que esta Corte Constitucional revise la apreciación de la prueba realizada por el juzgador ordinario, para efectos de que determine una clara vulneración de derechos.
- 6) Esta acción ha sido presentada dentro del término previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, conforme a lo indicado en el acápite V de esta demanda.
- 7) Esta acción no ha sido planteada en contra de una decisión del Tribunal Contencioso Electoral;
- 8) Finalmente, conforme se ha indicado a lo largo de esta acción, la admisión de la misma permitirá solventar graves vulneraciones a derechos constitucionales, como son: recibir respuestas motivadas por parte de los órganos jurisdiccionales; y, el derecho a la tutela judicial efectiva, en su dimensión a la ejecución integral de los fallos a fin de evitar casos de denegación de justicia, como el caso Mejía Idrovo vs Ecuador, donde la Corte IDH ya condenó al Estado ecuatoriano por no garantizar esta dimensión de la tutela judicial efectiva.

XIII. NOTIFICACIONES

Notificaciones que me correspondan a propósito de la presente acción extraordinaria de protección, las continuaré recibiendo en las casillas judiciales y electrónicas que tengo señaladas para el efecto, así como en la casilla constitucional **No. 620**.

Firmo conjuntamente con uno de mis abogados autorizados,

David E. Rivas Vinuesa
Procurador Judicial

Juan Francisco Guerrero del Pozo
ABOGADO, Mat. 8672 CAP